

- D O S S I E R -

Tiempos perdidos en América Latina: Ciudadanías vulneradas y violencia

Susana Mallo Reynal*

(Coordinadora)

En los países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los nadies, los dueños de nada, en países donde el derecho a la propiedad se está convirtiendo en el único derecho? ¿Y los hijos de los nadies? A muchos, que son cada vez más muchos, el hambre los empuja al robo, a la mendicidad y a la prostitución; y la sociedad de consumo los insulta ofreciendo lo que niega...

Eduardo Galeano, Patas arriba: la escuela del mundo al revés

Presentación

El objetivo del dossier es destacar los resultados de investigación, debatir teóricamente los desafíos y límites que éstos proponen en la construcción de una ciudadanía incluyente en un contexto de crisis y efectos sociales posteriores con la emergencia de nuevas formas de desigualdad y exclusión social. La relación entre ciudadanía, exclusión y violencia, adquiere una significación sociológica particular en tiempos recientes para comprender los vínculos frágiles entre estado y sociedad. Las crisis cíclicas y el incremento de la deuda social acumulada en América Latina, plantea viejas y nuevas cuestiones sociales para pensar el desarrollo. Así pues, la temática de las desigualdades sociales aparece nuevamente como un área central para la reflexión y estudio en la Sociología contemporánea. Es en este sentido, que se pretende apuntar a nuevos conceptos para referir a las transformaciones de las desigualdades sociales, como ser la exclusión social, la vulnerabilidad, el capital social, en tanto temática sociológica en sus vínculos con la formación de la ciudadanía participante, sustento último de la democracia. Esto recuerda a su vez, a otro autor clásico, Marshall¹ quien formuló con suma agudeza la relevancia del modo y tipos de extensión de la ciudadanía para la estructura social y los tipos de democracia.

1 Marshall T.H. (1967) Ciudadanía, clase social e status, Rio de Janeiro, Ed. Zahar.

* Profesora Investigadora Titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República.

El concepto de ciudadanía consiste en que cada cual sea tratado como miembro pleno en una sociedad de iguales. En países postergados como los nuestros, es casi imposible satisfacer esta demanda, la omisión de un Estado de bienestar y de una democracia sustantiva han hecho difícil la satisfacción de las obligaciones mínimas y han acentuado distancias y diferencias sociales que en estos últimos años, a pesar de las políticas públicas llevadas a cabo, no han podido ser acortadas y/o resueltas. En esta situación se hace imposible exigir a ciudadanos postergados cumplir con obligaciones, reivindicaciones de participación ciudadana u obligar a quien se encuentra en situación de dependencia a cumplir con las mismas obligaciones que los demás. Esto es algo esencial para alcanzar la igualdad.

Una política social efectiva debe colocar sus beneficios bajo las obligaciones comunes a todos los ciudadanos en lugar de eximirlos de ellas². En este sentido, una de las soluciones de corte teórico social que se propone es la creación de redes asociativas de la sociedad civil, grupos de carácter voluntario que construyen competencias y capacidad de ciudadanía a través de concepciones de responsabilidad personal y de compromiso mutuo de constituirse como sujetos verdaderamente responsables de su historia y de su futuro.

A partir de esta problemática, el dossier plantea la posibilidad de superar la noción exclusivamente normativa de democracia y justicia para incorporar e integrar la concepción de un ciudadano activo que ejerza derechos democráticos y alcance niveles básicos de igualdad y justicia. Es en este marco, que se hace imprescindible la incorporación de lo que se ha denominado el "pluralismo cultural", es decir la aceptación de otro ya no sólo como individuo, sino como grupo (etnias, mujeres, jóvenes, minorías postergadas, etc.).

Para ello, hacen falta políticas diferenciadas ante grupos culturalmente excluidos con necesidades particulares. Tales problemas se reflejan de manera insoslayable en nuestro continente donde dicha marginación y exclusión producen violencias y acosos sistemáticos de ciertos sectores de la sociedad.

Estas situaciones de exclusión se encuentran reforzadas por la retórica del miedo y la tan mentada inseguridad. El impacto que produce la exaltación de los miedos, sobre todo a través de los medios de comunicación, acentúa el debilitamiento de las políticas de contención del Estado Social y la emergencia de políticas represivas típicas del Estado Penal. En este contexto, el Estado aparece en una encrucijada entre dos caminos, el uso estatal de la violencia para reproducir la exclusión de grupos sociales postergados, o por otro lado, cartografiar la violencia de manera de identificar los núcleos más duros de la exclusión para revertir los círculos viciosos entre violencia y exclusión.

En América Latina, a partir de mediados de los '90, el escenario de la crisis hizo eclosión en la región, comenzando por México en 1994, desplazándose hacia el sur posteriormente afectando primero a Brasil en 1999, luego a Argentina en 2001 y Uruguay en 2002. A partir de este proceso, la posibilidad de predecir el devenir del bienestar social en función del crecimiento económico se ha quebrado, observándose un desacople de los indicadores sociales básicos. En teoría, sería esperable que estos últimos correlacionen positivamente (aunque con cierto rezago) con la oscilación de los ciclos económicos. Sin embargo, las desigualdades persistentes en América Latina y los fenómenos de pobreza masiva han determinado crecientes procesos de fragmentación social.

Las consecuencias de estas transformaciones se aprecian al comparar el desempeño de los sectores de bajos ingresos respecto a

2 Lawrence Mead *Beyond Entitlement: the social obligations and citizenship*, New York, Free Press, 1986.

los estratos medios y altos en los principales indicadores sociales. El devenir de variables como la distribución del ingreso, la dispersión salarial, la tasa de desempleo, el rezago y la deserción escolar, entre otras, indican el aumento de las distancias sociales en múltiples niveles. En términos analíticos, los principales efectos de la rigidez social se registran en los planos sociocultural y político.

En el terreno sociocultural, destruye valores y metas socialmente compartidas, en tanto transforma la orientación de los individuos respecto a las normas sociales. En conjunto, ambos procesos alteran las formas históricas de cooperación social e institucionalizan circuitos perversos de desafección. Esto es observable en las opiniones de los ciudadanos en temas como la desigualdad, la delincuencia, el acceso a bienes públicos y la confianza interpersonal.

En la esfera política, reduce la capacidad de los sectores más vulnerables de apropiarse de sus derechos y asumir sus responsabilidades, inhibiendo la formación de capital cívico y obstaculizando la creación de espacios de participación ciudadana. Desde el punto de vista de la calidad democrática, la combinación de ambos efectos determina la existencia de una sociedad dual respecto a sus niveles de bienestar, y una ciudadanía segmentada en términos de capital ciudadano y niveles de participación social. Y como han señalado algunos autores, las democracias de baja intensidad se retroalimentan en contextos sociales duales.

A partir de esta situación, se propone una revisión de resultados de investigación, e indicadores sociales, como asimismo un diagnóstico sobre la deuda social de las crisis. Paralelamente, una revisión de los impactos en el comportamiento y conformación de la ciudadanía en esta sociedad fragmentada y recientemente escindida.

La crisis marcó un punto de inflexión en el desarrollo social de los países latinoamericanos. La acumulación de una deuda social incrementada, un Estado ausente y sistemas de bienestar social debilitados, unidos a una sociedad más fragmentada con nuevas formas de desigualdades sociales, han planteado crecientes desafíos para la democracia y la construcción de la ciudadanía.

En tiempos de transformaciones en los proyectos de gobierno, en los cuales la agenda social del desarrollo ha pasado a ocupar un lugar prioritario para las políticas sociales, surgen nuevas interrogantes. ¿Es posible superar las consecuencias sociales negativas heredadas y las limitantes de la hegemonía del pensamiento económico neoliberal en las políticas públicas? ¿Cuáles son las concepciones dominantes y las nuevas formas emergentes del desarrollo? ¿Cuál es la capacidad de la sociedad salarial y el mundo laboral de recomponer los lazos sociales?

Es en este contexto que las políticas sociales son concebidas como emergentes o provisionarias, más que como políticas permanentes. Los pobres encuentran barreras en la práctica para ejercer sus derechos como ciudadanos. Así, mientras que para determinados sectores sociales el ejercicio de la ciudadanía queda reducido a la posibilidad de consumo de los individuos y la participación pasiva en las elecciones, en los sectores sociales más vulnerables no pueden siquiera ejercer en su totalidad esos derechos. En este sentido, es necesario recuperar la capacidad crítica de las promesas y garantías de los derechos ciudadanos radicalizando el sentido de la democracia.

Todo ello, plantea la urgencia de repensar las nuevas condiciones de exclusión de los sectores postergados y la búsqueda de mecanismos de inclusión alternativos, que regeneren formas de inserción e integración en la vida social. Las nuevas formas de la exclusión

social se caracterizan por la no participación y la reducción a un mínimo de usufructo de la riqueza socialmente construida. Pero lo más grave, reside en el desacoplamiento de las estructuras fundamentales de integración social, de la desarticulación creciente entre el mundo del trabajo, la educación y la familia. Esto supone regenerar vínculos, redes, mecanismos y lazos que permitan una real inclusión e integración de los individuos en la sociedad.

Es a partir de estas problemáticas que el dossier pretende contribuir a un debate crítico de paradigmas y perspectivas para comprender la relación entre exclusión social, violencia y políticas públicas de inclusión ciudadana. El análisis se orientará a comprender los supuestos y categorías teóricas, desde diferentes perspectivas. Asimismo, plantear qué tipo de ciudadanía se proponen y cuáles son los desafíos para la construcción de una ciudadanía incluyente en el marco de las transformaciones de las relaciones entre Estado y Sociedad. Recuperar una visión ampliada de una identidad compartida, una pertenencia comunitaria y una cultura ciudadana participativa es el largo y difícil camino que los gobiernos de centro izquierda o denominados progresistas deberán recorrer.

Los artículos que componen este dossier abordan la temática desde distintas perspectivas. Comienzo con una reflexión sobre los desafíos comunes y específicos de América Latina y El Caribe, en un clima político ideológico y de movilización social pautado

entre la indignación y la esperanza. El artículo de los investigadores Felipe Arocena y Jessica Elfstrom analiza los debates contemporáneos de la cuestión racial y las políticas públicas en democracia desde el caso brasileño. El aporte del profesor Yamandú Acota retoma la idea de ciudadanía, mostrando las tensiones entre los proyectos alternativos de la modernidad y de la democracia en las democracias postransicionales en América Latina, entendidas como la última transición del autoritarismo a la democracia de los 80 a 90. El trabajo de Miguel Serna plantea los desafíos de continuidad y transformación de las políticas de la pobreza a partir del pos consenso de Washington. El artículo de Anabel Rieiro busca reflexionar sobre las potencialidades y limitantes de regenerar y construir nuevas formas de ciudadanía en sectores vulnerados a través del análisis de las prácticas de autogestión colectiva llevadas a cabo por las unidades productivas recuperadas por sus trabajadores en Uruguay. Nilia Viscardi aborda los fenómenos de violencia difusa y juventud como la violencia doméstica, interpersonal y delictiva fundamentalmente en jóvenes marginados. Finalmente, el artículo de Pilar Calveiro plantea la difícil relación entre violencia y política, a la luz de algunas de las experiencias de las últimas décadas en América Latina que refutan la pertinencia tanto de una visión guerrera de la política como de una mirada pacificada y hasta cierto punto de vista ingenua.